



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**R.C.242/2019**

En dos de marzo de dos mil veinte, el secretario de acuerdos, da cuenta a la Presidenta del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con la promoción registrada con el número 1324 consistente en el proveído de diez de febrero de dos mil veinte dictado por el PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en la contradicción de tesis 46/2020. Conste.

Ciudad de México, a dos de marzo de dos mil veinte.

Agréguese a sus autos el proveído de diez de febrero de dos mil veinte dictado por el PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en la contradicción de tesis 46/2020, mediante el cual informa que admitió la denuncia de posible contradicción de tesis 46/2020 de su índice y en virtud de que la resolución emitida en el presente asunto por el Pleno de este Tribunal Colegiado es ahí contendiente solicita se le informe la vigencia del criterio ahí sustentado.

Al respecto informese mediante la versión digitalizada que se realice del presente proveído y la sentencia solicitada, se remitan a la cuenta de correo electrónico institucional que indica para tal fin, que el criterio sustentado en la ejecutoria del presente recurso de revisión R.C. 242/2019 por este Tribunal Colegiado se encuentra vigente, en el entendido de que se resolvió por unanimidad de votos, además se ordena el envío VIA-MINTER del archivo digital que contenga la sentencia dictada en el presente recurso.

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

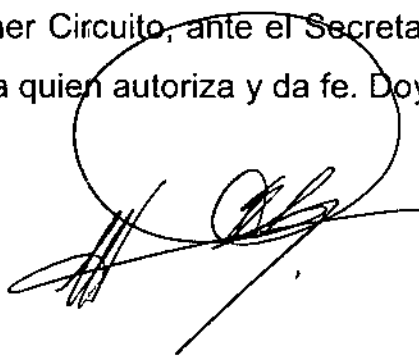
Por otra parte, toda vez que el presente asunto se encuentra involucrado en la denuncia de una posible contradicción de tesis y se advierte que se ordenó su archivo como susceptible de depuración, sin embargo, en atención a que fue motivo de Denuncia de Contradicción de Tesis; por ello, de conformidad con el Capítulo Primero, Punto XVII del Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como lo dispuesto por el Manual para la Organización de los Archivos

**Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, aprobado el día **diez de diciembre de dos mil doce**, que en su parte considerativa señala: *"Los puntos Vigésimo y Vigésimo Primero del AGC 2/2009 precisan los supuestos en que procede la destrucción o depuración de los expedientes judiciales, y, en su caso, su conservación por ser de relevancia documental; en virtud de ello deberán **conservarse** aquellos expedientes que no se encuentren considerados en tales supuestos; dentro de éstos se ubican los impedimentos, excusas, recusaciones, conflictos competenciales, incidentes de repetición de acto reclamado, incidentes de inejecución de sentencia, inconformidades, entre otros."*; se determina que **ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE CONSERVACIÓN** y no se ubica en el supuesto de considerarlo como de relevancia documental en términos del Capítulo Tercero, Punto Noveno, fracción IV, del propio Acuerdo.

Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, téstese el sello de la carátula de este expediente y colóquese el que corresponda.

**CÚMPLASE.**

Así lo acordó y firma la Magistrada Martha Gabriela Sánchez Alonso, Presidenta del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ante el Secretario de Acuerdos Hilario Salazar Zavaleta quien autoriza y da fe. Doy fe.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55

23

R.C. 242/2019.

QUEJOSA Y RECURRENTE:

[REDACTED]

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
PONENTE: MAGISTRADO J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI

SECRETARIA: PATRICIA ÁVILA JASSO

Vo.Bo.

ENGROSADA  
LICENCIADA  
PATRICIA  
ÁVILA JASSO



PODER JUDICIAL DE LA  
FEDERACIÓN  
TRIBUNAL COLEGIADO  
EN MATERIA CIVIL  
PRIMER CIRCUITO  
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, resolución del Décimo  
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,  
correspondiente al diecisiete de octubre de dos mil  
diecinueve.

VISTOS para resolver los autos del toca R.C.  
242/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por

[REDACTED]

[REDACTED]

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN por conducto de su apoderado [REDACTED]

[REDACTED] en contra de la resolución dictada en audiencia  
constitucional de dieciséis de julio de dos mil diecinueve,  
por el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad  
de México, engrosada el treinta y uno del mes y año citados,

en los autos del juicio de amparo 572/2019, promovido por la quejosa y recurrente; y

### RESULTANDO:

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado el siete de junio de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, [REDACTED] r, [REDACTED] a, [REDACTED] on [REDACTED] e, [REDACTED] p [REDACTED] conducto de su apoderado [REDACTED], solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Vigésimo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, que consideró violatorios en su perjuicio de los derechos humanos y garantías para su protección tutelados en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales y que precisó de la siguiente forma:

***"IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: - - -***

***De la autoridad antes señalada se reclama la resolución dictada con fecha VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, en los autos del expediente 394/2019, formado con motivo de la solicitud de providencias precautorias promovidas por mi poderdante, en contra (sic)***

[REDACTED]





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 242/2019

FORMA A-55

3

24

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] A. LO

ANTERIOR COMO ACTO PREJUDICIAL."

A continuación narró los antecedentes de su demanda, los que no se transcriben por considerarse innecesario.

SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juez Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, quien mediante proveído de once de junio de dos mil diecinueve la registró con el número 572/2019 y la admitió a trámite.

TERCERO. Seguida la secuela procesal, en audiencia constitucional de dieciséis de julio de dos mil diecinueve el Juez de Distrito del conocimiento pronunció resolución engrosada el treinta y uno del mes y año citados, en la que resolvió:

**"ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA ni PROTEGE a**

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN**

**[REDACTED], contra el acto que reclamó del Juez Vigésimo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México."**

CUARTO. Inconforme con dicha determinación la

quejosa [REDACTED], [REDACTED] a, [REDACTED] on  
[REDACTED], [REDACTED] o [REDACTED] r,  
por conducto de su apoderado [REDACTED] z, la  
recurrió en revisión, de la que tocó conocer a este Décimo  
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito donde  
se admitió mediante proveído de su Presidente de veintidós  
de agosto de dos mil diecinueve.

El tres de septiembre siguiente, en estado de  
sentencia, los autos se turnaron al Magistrado ponente para  
que formulara el proyecto de resolución correspondiente; y,

#### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO.** Este Tribunal Colegiado en Materia Civil  
del Primer Circuito es competente para conocer y resolver el  
presente recurso de revisión, de conformidad con lo  
dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso b), párrafo  
final de la Constitución Política de los Estados Unidos  
Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 87 y 88 de la Ley  
de Amparo; en relación con los artículos 37, fracción IV, 38,  
144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la  
Federación, los Acuerdos Generales números 14/2000 y  
3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,  
relativos a la fecha de inicio de las funciones de este Tribunal  
y a la determinación del número y límites territoriales de los  
circuitos en que se divide la República Mexicana; y al





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 242/2019

FORMA A-55

5  
25

número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y el acuerdo 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en virtud de que se trata de un recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia dictada por un juez de Distrito perteneciente al circuito en el que ejerce jurisdicción este órgano colegiado.

**SEGUNDO.** El recurso de revisión fue presentado el catorce de agosto del año en curso ante la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, dentro del término de diez días precisado en el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el que transcurrió del cinco de agosto de dos mil diecinueve al dieciséis del mes y año en cita, cómputo del cual se descuentan los días diez y once de agosto del año en curso, por ser inhábiles conforme a lo establecido en los preceptos

119, 82 y 86 de la ley en cita y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

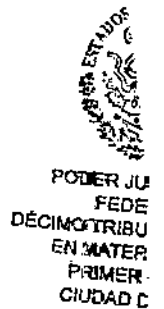
**TERCERO.** La resolución recurrida se apoyó en las siguientes consideraciones:

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN**



PODER JUDICIAL DE LA  
FEDERACIÓN  
TRIBUNAL COLEGIADO  
DE MATERIA CIVIL DEL  
PRIMER CIRCUITO  
DE MÉXICO

**"III. COMPETENCIA - - - Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 36/2016, que reformó al diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis. - - - Lo anterior, en virtud de que en la especie se reclama una resolución dictada en unas providencias precautorias en las cuales se confirmó el auto en el cual se fijó garantía a la institución de crédito solicitante. - - - IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO - - - Por cuestión de orden, y a**







PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 242/2019

FORMA A-55

7

26

efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario delimitar el acto reclamado, que se deduce del estudio íntegro de la demanda, así como de las constancias de origen. - - - En ese

contexto, el acto reclamado se hace consistir en la resolución del recurso de revocación que confirmó el proveído en el cual se fijó garantía a la institución de crédito solicitante de unas providencias precautorias para resarcir los posibles daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar a los presuntos demandados, emitida por un juez civil de proceso oral. - - - V.

**CERTEZA DEL AGTO RECLAMADO** - - - Es cierto el acto reclamado que se atribuye a la autoridad responsable, puesto que así lo manifestó al rendir su informe justificado. - - - Ilustra lo

anterior, la jurisprudencia 305, de registro 394261, sustentada por el Tribunal Pleno de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, tomo VI, materia

común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor: - - - 'INFORME

JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe



PODER JUDICIAL DE LA  
FEDERACIÓN  
TRIBUNAL COLEGIADO  
DE LA CIVIL DEL  
CIRCUITO  
DE MÉXICO

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN**

tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.' - - - **Certeza que se corrobora con las documentales que anexó a su informe justificado, consistentes en copia certificada de diversas constancias del expediente 394/2019; documental a la que se otorga valor probatorio pleno, conforme con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. - - - VI. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA - - - La demanda de amparo se presentó oportunamente el siete de junio de dos mil diecinueve, toda vez que la resolución reclamada de veintiocho de mayo del año en mención se notificó por medio de Boletín Judicial el veintinueve siguiente, surtió efectos el treinta del mes citado en segundo orden. - - - Así, en términos de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el término de quince días para la promoción del presente juicio de amparo transcurrió del treinta y uno de mayo al veinte de junio de dos mil diecinueve, sin contar los días uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de junio de dos mil diecinueve, por ser inhábiles de**





conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, de lo que se concluye que la demanda se presentó dentro del plazo que refiere el precepto primeramente invocado. - - - VII.

**ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA** - - - Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien las que de oficio se adviertan actualizadas, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. - - -

Sirve de apoyo en (sic) la jurisprudencia 940, visible en la foja 1538, segunda parte, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, cuyo texto dice: 'IMPROCEDENCIA.

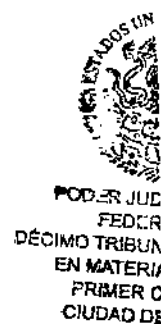
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo por ser cuestión de orden público y de estudio preferente.' - - - En

el particular, las partes no hicieron valer causales y el suscrito no advierte de oficio que

se actualice alguna. - - - VIII. ESTUDIO DE FONDO - - - En obvio de repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos los conceptos de violación, pues no existe precepto

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN**

*en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia; sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que se hayan hecho valer. - - - Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: - - - 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego*





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 242/2019

FORMA A-55

11

28

correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. - - Los temas

propuestos son: - a) Que la responsable dejó de aplicar correctamente los preceptos 1, 2, 1054, 1063, 1101, 1168, 1175, 1176, 1179 y 1189 del Código de Comercio y 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como el principio pro persona. - b) Que al formar parte del sistema financiero es de acreditada solvencia, por lo que se le debe eximir de exhibir la garantía a que refiere el numeral 1175, fracción V, del Código de Comercio. - c) Después de referir a

la Ley de Instituciones de Crédito establece que tiene el carácter de comerciante, por lo que las

providencias, precautorias, como, actos prejudiciales a juicio ejecutivo mercantil se rigen

por disposiciones generales y por consiguiente,

no solamente es aplicable el Código de

Comercio, sino también otras leyes mercantiles.

- - - d) Que pretende una interpretación armónica



PODER JUDICIAL DE LA  
FEDERACIÓN  
AL COLEGIADO  
DE JUECES  
CIVIL DEL  
CIRCUITO  
DE MÉXICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*y no subordinada del Código de Comercio, cuando una institución no está regulada de manera suficiente, al efecto, invoca el criterio de rubro: 'SUPLETORIEDAD DE LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.' - - - e) Que la tesis citada por la responsable bajo el rubro: 'INSTITUCIONES DE CRÉDITO. TRATÁNDOSE DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE AMPARO, RESULTA INAPLICABLE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY QUE LAS RIGE.', no resulta aplicable. - - - f) Que otros jueces han admitido las medidas que ha promovido sin que en esos sumarios se le hubiera hecho la fijación de garantía. - - - Los motivos de disenso deben desestimarse. - - - En primer orden, es inoperante la alegación en la cual la parte quejosa alega que la tesis citada por la responsable bajo el rubro: 'INSTITUCIONES DE CRÉDITO. TRATÁNDOSE DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE AMPARO, RESULTA INAPLICABLE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY QUE LAS RIGE.', no resulta aplicable. - - - En efecto, se dice que tal argumento es inoperante en atención a que a través de éste, pretende de nueva cuenta impugnar el auto recurrido, tema que no*



PODER JUE  
REDEF  
DECISION TRIBUNAL  
EN MATERIA  
PRIMER  
CIUDAD O



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 242/2019

FORMAA-55

13

29

constituye la litis en el amparo, pues no se debe resolver si la referida resolución cuya impugnación se dio en el recurso de revocación se encuentra o no ajustada a derecho, sino que debe decidirse si esta última, dictada por la responsable en el expediente 394/2019, la cual sustituyó procesalmente a la recurrida, fue pronunciada o no conforme a la ley. - - - Por tanto, son inoperantes las manifestaciones encaminadas a combatir la determinación dictada por el juez de primer grado, al haber sido impugnada a través del recurso de revocación, determinación esta última que sustituyó procesalmente al auto, en el cual se citó el criterio mencionado, de ahí que se insiste en la inoperancia apuntada al pretender vincular y combatir lo resuelto por el juez natural no en la revocación, sino en el auto impugnado, no se combate el acto reclamado consistente en la interlocutoria de once de junio de dos mil dieciocho, cuyas consideraciones son las que conforman la controversia constitucional. - - - En ese sentido, si no se combaten los razonamientos de la sentencia de segunda instancia (sic), deben mantenerse vivos para



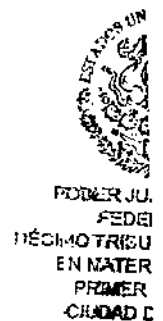
PODER JUDICIAL DE LA  
FEDERACIÓN  
AL COLEGIADO  
JUDICIAL DEL  
PRIMER CIRCUITO  
DE MÉXICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**continuar rigiendo, en este aspecto, el sentido del fallo reclamado. - - - Resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 1811 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor siguiente: - - -**

**'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO IMPUGNAN UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE YA FUE SUSTITUIDA POR OTRA DE SEGUNDO GRADO. Si los conceptos de violación se encuentran orientados a impugnar la valoración que de un hecho hizo el Juez de primera instancia, en la sentencia que cesó en sus efectos puesto que se apeló la misma y se dictó fallo de segundo grado, los conceptos señalados resultan inoperantes, por no poderse analizar una sentencia que ya fue sustituida por la de segunda instancia.'**<sup>1</sup> - - - **En ese**

**tenor, son infundados los restantes argumentos propuestos. - - - En primer lugar, debe tenerse presente que la garantía a la tutela jurisdiccional reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a**



<sup>1</sup> Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Materia Común. Página 2059.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 242/2019

FORMA A-55

15

30

defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. -

- - Este derecho a la tutela jurisdiccional no es

absoluto, pues el referido precepto

constitucional autoriza al legislador a regular los

plazos y términos en los que debe garantizarse

ese acceso a la justicia; lo que debe entenderse

bajo la condición de que tales requisitos no

resulten innecesarios, excesivos y carentes de

razonabilidad o proporcionalidad respecto de los

finés que lícitamente puede perseguir el

legislador. - Ciertamente, conforme al artículo

1175 del Código de Comercio,<sup>2</sup> la persona que

solicite la retención de bienes, para su

procedencia, debe cumplir con cuatro requisitos:

- - - a) Probar la existencia de un crédito líquido y

<sup>2</sup> Art. 1,175. El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos: - - I. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor; - - II. Exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión; - - III. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas; - - IV. Tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles, y - - V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte. - - El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*exigible a su favor; - - - b) Expresar el valor de las prestaciones que se reclaman; - - - c) Manifestar bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene más bienes que aquellos sobre los que se practica la medida; y, - - - d) Garantizar los daños y perjuicios que la medida precautoria pueda ocasionar al deudor, en caso de que no se presente la demanda oportunamente o porque se le absuelva en el juicio. - - - La última condición constituye un requisito de eficacia de la medida precautoria, que debe satisfacerse para que surta sus efectos y se justifica por la grave afectación que la medida genera sobre el derecho del deudor para disponer materialmente de sus bienes o recursos económicos, pues con la retención decretada en su contra se le impediría utilizarlos para realizar sus fines, de modo que esa indisponibilidad podría afectar su desarrollo económico al provocar el incumplimiento de sus obligaciones. - - - Además, para decretar la medida precautoria, el juez no escucha previamente al afectado, sino que su derecho de garantía se concede hasta que la medida fue materializada, de conformidad con el artículo*





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 242/2019

FORMA A-55

17

31

1179 del código mercantil, motivo por el cual el legislador exige que el solicitante otorgue una garantía, personal o real, que sea suficiente para asegurar la reparación de los daños y perjuicios que la medida precautoria pueda ocasionar al deudor, en caso de que ésta resulte infructuosa, porque no se presentó la demanda en el plazo legal o éste sea absuelto de las prestaciones reclamadas, asegurándose así que esos daños puedan verse inmediatamente reparados mediante la ejecución de la garantía. - - Por tanto, el otorgamiento de la garantía como requisito de eficacia de la medida precautoria no constituye un formalismo carente de razonabilidad ni excesivo, por el contrario, constituye una condición que se justifica para reparar sin obstáculos la afectación que se produciría por la indisponibilidad de los bienes del deudor, a quien ni siquiera se le concede en este caso garantía de audiencia previa, para no frustrar la finalidad de la medida. - - Además, el artículo 1175 del Código de Comercio no establece salvedad alguna para la satisfacción de dicho requisito de eficacia, por lo que exige que todo el que solicite la medida precautoria



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
AL COLEGIO DE JUECES  
CIVIL DEL CIRCUITO  
DE MÉXICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*deba otorgar garantía para los analizados efectos. - - - Por su parte, el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito<sup>3</sup> coloca dentro de un ámbito jurídico privilegiado a los integrantes del sistema bancario mexicano al reconocerles acreditada solvencia, de ahí que no están obligados a constituir depósitos o fianzas legales, con especial énfasis en los juicios de amparo, tratándose de la suspensión de los actos reclamados, así como en la materia fiscal, con la condición de que no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra. - - - Así, pudiera considerarse que dicho precepto les exime de presentar materialmente alguna garantía para responder por los daños y perjuicios que se generen en los procedimientos en los que intervengan, ante la presunción legal de capacidad patrimonial para reparar el daño e indemnizar de los perjuicios ocasionados a su contraparte. - - - En ese contexto, aparentemente existe una antinomia o incompatibilidad entre lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito y el numeral 1175,*

  
FEDERICO  
DÉCIMO TRIB  
EN MATE  
PRIMEI  
CIUDAD

<sup>3</sup> Artículo 86. Mientras los integrantes del Sistema Bancario Mexicano, no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligados a constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 242/2019

FORMA A-55

19

32

fracción V, del Código de Comercio, pues éste ordena que los peticionarios de las medidas precautorias otorguen garantía para tales efectos, sin establecer excepción alguna; mientras que aquel precepto dispensa de dicha garantía a los integrantes del sistema bancario mexicano. - - Este aparente conflicto entre reglas debe resolverse conforme al principio de especialidad de la ley (*lex specialis derogat legi generali*), porque los supuestos de procedencia y el procedimiento de las medidas de aseguramiento en materia mercantil, son regulados específicamente por la parte adjetiva del Código de Comercio y no por la Ley de Instituciones de Crédito, que tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito, así como el funcionamiento de las instituciones de crédito, de acuerdo con lo dispuesto por su artículo 1. - -

- Así, al partir del principio de especialidad de la

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION**

ley, los preceptos del código mercantil, no están subordinados a una disposición contenida en

otra ley federal, que se encuentra en contradicción con el Código de Comercio, pues los mandatos procesales de éste, a la luz de lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, son

*los que deben regir la interpretación y aplicación frente a cualquier otra ley en cuanto a la procedencia y tramitación de las medidas cautelares en materia mercantil, para no hacer nugatorias las disposiciones y finalidades que las rigen. - - - Se considera así, porque desde el punto de vista gramatical y funcional, ambas disposiciones citadas admiten una interpretación distinta, por lo cual se descarta una antinomia y se apega en mayor medida al principio de interpretación más favorable para las personas, contenido en el artículo 1 Constitucional. - - - Así, la interpretación gramatical consiste en considerar que el artículo 1175 de la legislación mercantil no establece excepción alguna para los particulares sobre el otorgamiento de la garantía de daños y perjuicios. - - - Por otro lado, conforme a la interpretación funcional, el citado artículo resulta congruente con la señalada finalidad de reparar de manera íntegra y expedita esos daños y perjuicios que con la medida se le pudieran ocasionar al deudor, mediante el otorgamiento de una garantía real o personal que sea desde luego adicional a los bienes del patrimonio con*





los que todo deudor responde de sus obligaciones lo que permitiría su fácil realización para compensar ese daño indebidamente ocasionado. - - - Ahora bien, la resolución reclamada que confirmó el proveído que estableció que la quejosa no estaba exenta de exhibir garantía para resarcir los posibles daños y perjuicios que pudieren ocasionarse a las personas respecto de las cuales solicitó el otorgamiento de las medidas, contiene las consideraciones siguientes: - - - '...De lo ante (sic)

resenado, se observa que la fijación de la garantía ahí señalada establece como requisito para procedencia de la providencia precautoria decretada ya sea antes o después de tramitado un juicio, ello en atención a que como se indica en el citado ordenamiento legal, es para garantizar primero que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en el Código de Comercio, o bien segundo que, promovida la demanda, en la resolución definitiva sea absuelta su contraparte. Supuestos de los cuales, el primero de ellos depende únicamente de la finalidad de garantizar a los demandados, que esa medida decretada, no se prolongue más allá de lo necesario y no se cause un daño. - - - Aunado

a lo anterior y de acuerdo a la jerarquía del orden jurídico del derecho el cual refiere al rango de las normas jurídicas para su aplicación, teniéndose el siguiente orden para ello: - - - 1. La Constitución y Tratados Internacionales - - - 2. La Ley

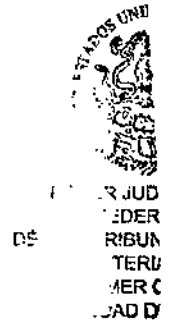
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
AL COLEGIO DE JUECES  
CIVIL DEL CIRCUITO  
DE MÉXICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

5

Federal - - - 3. La Ley Ordinaria - - - 4. El Decreto - - - 5. El Reglamento - - - 6. Las normas jurídicas individualizadas: contrato, sentencia, testamento y resolución administrativa, a lo anterior le es aplicable la Tesis Aislada que dice: - - -

'CÓDIGO DE COMERCIO, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. TIENE LA MISMA JERARQUÍA DE LAS LEYES EMANADAS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. Aun cuando el Presidente de la Republica haya expedido el Código de Comercio en uso de las facultades extraordinarias que el Congreso de la Unión le concedió, mediante decreto de fecha cuatro de junio de mil ochocientos ochenta y siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día siguiente, debe estimarse que se trata de un ordenamiento general y abstracto, ya que tratándose de facultades delegadas, el Ejecutivo actúa como órgano legislativo en sustitución y autorización del Congreso Federal y no como administrador. Consecuentemente, los ordenamientos expedidos en uso de tales facultades tienen la misma jerarquía de las leyes emanadas del propio Congreso.' - - - En el orden antes precisado, se tiene en primer término a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y a los Tratados Internacionales y en segundo lugar a las leyes federales, las cuales, en el presente caso, es el Código de Comercio, en el cual en su artículo 1175 fracción V del Código de Comercio (sic) se establece que el juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con garantizar los daños y perjuicios que pueden ocasionar con la medida precautoria al deudor. - - - Ya sea que se haya decretado con anterioridad o durante un procedimiento; en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta







PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 242/2019

FORMA A-65

23

31

su contraparte, el monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidado de (sic) la misma sea asequible para el solicitante, para ello este juzgador de manera fundada, motivada, detallada y explicada sostiene con cuentas aritméticas cómo es que obtuvo la cantidad como garantía por concepto de daños y perjuicios como se puede observar del propio auto materia del presente recurso. Por lo anterior, se tiene que la ley especial como lo es la Ley de Instituciones de Crédito no puede estar por encima de una Ley Federal siendo ésta el Código de Comercio, partiendo de un principio de hermenéutica jurídica, no puede aceptarse que el artículo 1175 del Código de Comercio quede subordinado a la aplicación del artículo 86 de la citada ley, en el cual exime a las instituciones de crédito de constituir depósito o fianza legal, en virtud de que la garantía constituye un anticipo de la tutela jurisdiccional y tiene como propósito garantizar los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse con la medida precautoria. - - - Por lo anterior, su fijación y cuantificación ordenada en el proveído de fecha dieciséis de mayo del año que transcurre, está dictada conforme a derecho, sirviendo de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia que a su letra dice: - - -

## PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

INSTITUCIONES DE CRÉDITO, SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A OTORGAR GARANTÍA O CONTRAGARANTÍA EN MATERIA DE SUSPENSIÓN, TRATÁNDOSE DE AMPARO DIRECTO. INSTITUCIONES DE CRÉDITO, SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A OTORGAR GARANTÍA O CONTRAGARANTÍA EN MATERIA DE SUSPENSIÓN, TRATÁNDOSE DE AMPARO DIRECTO. EI

artículo 173 de la Ley de Amparo, establece que debe otorgarse fianza para que surta efectos la suspensión concedida o, en su caso, contrafianza para nulificar la medida cautelar y esta exigencia emana de la aplicación de un precepto constitucional como lo es el artículo 107, fracción X, de la Carta Magna; por tanto, es evidente que no obstante que el artículo 6o. de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito exime a las instituciones de crédito de constituir depósito o fianza legales, tales instituciones se encuentran obligadas a otorgar fianza para obtener la suspensión de sentencias definitivas que se reclamen en amparo directo y, en su caso, contragarantía para dejar sin efecto la medida suspensiva, porque partiendo de un principio de hermenéutica jurídica, no puede aceptarse que los preceptos relativos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, queden subordinados a una disposición también contenida en otra ley reglamentaria que se encuentra en contradicción con la Ley de Amparo, pues los mandatos de ésta, en relación con los preceptos constitucionales, son los que deben regir la interpretación y aplicación de cualquier otra ley en cuanto al juicio constitucional, para no hacer nugatorias las disposiciones del citado juicio de garantías.' - - - Derivado de lo anterior y dado que la garantía fijada en el acuerdo recurrido as (sic) un requisito legal, que establece el ordenamiento federal, luego entonces resulta infundado. - - - El recurso de revocación propuesto por el banco promovente, toda vez que no puede aplicarse un ordenamiento especial antes que la legislación Federal.' - - - **Como puede advertirse, la responsable estableció correctamente el porqué, acorde con lo que la jerarquía de las leyes establece, que a partir de**





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 242/2019

FORMAA-55

25

35

la Ley de Instituciones de Crédito, la institución quejosa está exenta de la exhibición de garantía para que se pueda resarcir a los presuntos demandados todo daño o perjuicio que se les pueda generar con el obsequio y ejecución de las providencias precautorias (sic), atento a que debe prevalecer lo establecido en el numeral 1175 del Código de Comercio. --- Cabe precisar que tales consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia PG-I.C. J/85 C (10a.) de registro 2018902, sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la foja 1220, libro 62, Enero de 2019, Tomo II, Materia Civil, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor: --- 'MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DEL EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS COMO PROVIDENCIA PRECAUTORIA Y PUEDE SOLICITARSE DE FORMA GENÉRICA AL JUEZ MERCANTIL PARA QUE LA OTORQUE. Los artículos 1168 y 1175 a 1178 del Código de Comercio regulan las providencias precautorias, previas al juicio, tratándose de acciones personales, consistentes en la retención de bienes, las cuales son aplicables al embargo de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
JUEZ MERCANTIL COLEGIADO  
PRIMER CIRCUITO  
DE MÉXICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

dinero depositado en cuentas bancarias y de las que se advierten los siguientes requisitos: 1. Que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en los que se ha de practicar la diligencia; 2. Al tratarse de dinero en depósito en instituciones de crédito, se presumirá el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo; 3. Se pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible; 4. Se exprese el valor de las prestaciones; 5. Se manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en los que se ha de practicar la diligencia; 6. Se garanticen los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor; 7. La retención de bienes se registrará, en lo que le resulte aplicable, por lo dispuesto para los juicios ejecutivos mercantiles, y; 8. No se requiere citar a la persona contra quien ésta se pida. Derivado de lo anterior, no existe razón legal para condicionar la procedencia de la medida a que se exija al solicitante la identificación de las cuentas cuyos fondos se pretenden retener ni mencionar los bancos en que se ubican, pues lo único que debe de expresar es el valor de las prestaciones (punto 4) y manifestar bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en los que se ha de practicar la diligencia (punto 5); estimar lo contrario, tendría como consecuencia imponerle mayores requisitos a los previstos, en atención a que el acreedor no siempre tiene acceso a dicha información, lo que no puede constituir un impedimento para la procedencia de la medida. Además, el artículo 1176 del código mencionado





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 242/2019

FORMA A-55

27

36

establece que la retención de bienes decretada como providencia precautoria se registrará, en lo que le resulte aplicable, por lo dispuesto para los juicios ejecutivos mercantiles, apartado en el que tampoco existe tal carga, por lo que efectuar una distinción entre ambos procedimientos, lejos de armonizarlos, provocaría una regulación distinta, lo que no es acorde ni con la naturaleza de dicha medida ni con lo ordenado en el referido artículo. Lo anterior, se robustece con lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, que regulan el secreto bancario al establecer que la información relativa a los servicios bancarios es de carácter confidencial, por lo que el solicitante estaría impedido para obtenerla de las instituciones y autoridades bancarias; sin embargo, ello es posible sólo cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de alguna providencia, como ocurre con la retención de bienes, al constituir un procedimiento legalmente previsto para garantizar el cumplimiento de la ejecución de una sentencia mercantil, por lo cual, ese fundamento sirve no sólo para evitar que el solicitante deba proporcionarla como requisito de procedencia, sino también faculta al Juez para recabarla cuando dicha petición se realice de forma genérica.

De ahí que, exigir dicho requisito, pudiere, incluso, transgredir el derecho al secreto bancario del deudor, y desnaturalizaría el objeto de la medida cautelar, provocando que puedan, ocultarse, dilapidarse o enajenarse los fondos de la cuenta bancaria en perjuicio del acreedor. Finalmente, lo anterior no puede considerarse como una 'pesquisa', ni contraviene lo dispuesto en los artículos 42, 43 y 44 del



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
TRIBUNAL COLEGIADO  
DE LA CIVIL DEL  
PRIMER CIRCUITO  
DE MÉXICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*Código de Comercio, ya que la medida de aseguramiento citada no se decreta de oficio ni consiste en inquirir al deudor para que lleve o no un sistema de contabilidad específico y, además, porque la información de las cuentas tiene relación directa con la acción deducida y es del interés del propio deudor, por lo cual, los últimos dos preceptos citados avalan la posibilidad de que el Juez mercantil realice actos tendientes a identificar las cuentas bancarias sobre las cuales deba recaer la providencia precautoria.' - - - De dicha jurisprudencia se destaca que se establecen los requisitos que deben considerarse para dictar la medida precautoria, entre ellos, la exhibición de la garantía, sin prever excepciones en el caso de instituciones de crédito. - - - Ahora bien, como ya se adelantó, son infundados los conceptos de violación. - - - Lo anterior, porque contrario a lo que refiere la peticionaria del amparo, la acreditada solvencia económica que legalmente le reconoce el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, no es motivo suficiente para que se le exima de presentar dicha garantía que prescribe el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio, pues con independencia de la suficiente (sic) de su capacidad patrimonial para reparar el daño, el último precepto citado exige que se presente*





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 242/2019

FORMAA-55

29

37

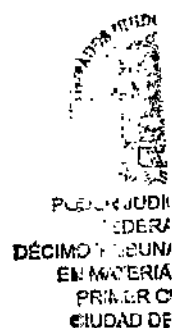
una garantía suficiente para ello, a fin de que ésta pueda ser fácilmente realizada y no existan trabas para la compensación del daño causado a quien le fueron indebidamente retenidos sus bienes. - - - Además, porque el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito no es complementario del diverso 1175 del Código de Comercio, pues en este cuerpo de normas se contempla una regla procesal especial que prevalece frente a la primera, pues aquel numeral no tiene por objeto regular los requisitos de procedencia para el secuestro de bienes como medida precautoria para asegurar el éxito de un juicio mercantil, de modo que dicho precepto no es susceptible de constituir una excepción a la regla contenida en el referido artículo 1175 del Código de Comercio, que es la que debe regir la aplicación de dichos supuestos, en relación con lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, que faculta al legislador a establecer los plazos y términos en los que debe garantizarse el acceso a la justicia; en este caso, el derecho a la tutela cautelar, como vía imprescindible para que la tutela judicial efectiva no se frustre. - - - Sobre esa



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
JUNTA COLEGIADA  
CIVIL DEL  
CIRCUITO  
DE MÉXICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

base, se encuentra justificado el condicionamiento de la ejecución de la providencia precautoria a la exhibición de la garantía mencionada; aunado a que el juez responsable sustentó su determinación en un criterio basado en el principio de especialidad de la ley y la interpretación de las normas relativas a la obligación o no, de exhibir garantía dada la naturaleza de la promovente de las providencias, en relación con el tipo de procedimiento de que se trata, a efecto de resolver el problema concerniente a su aplicación. - - - En ese sentido, la responsable, al interpretar de manera armónica tanto la Ley de Instituciones de Crédito como el Código de Comercio, acató las leyes emitidas por el Poder Legislativo, aprobadas y promulgadas por el Poder Ejecutivo, las cuales debe vigilar el Poder Judicial; pues justificó su decisión para no aplicar el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito al asunto sometido a su potestad. - - - En otro aspecto y en cuanto a la trasgresión al principio pro persona que refiere la peticionaria del amparo; debe decirse que dicha interpretación no le favorece, ya que si bien dicho principio dispone que se debe acudir







PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 242/2019

FORMA A-55

31

38

a la norma que reconozca más o mejores derechos y que en la interpretación de ellos, se debe preferir la que resulte más favorable a la persona; y, por el contrario, cuando se trata de limitarlos se debe atender a la norma que menos restricciones tenga. - - En esas condiciones, el

citado principio no puede servir de base para disminuir o poner en un plano inferior los derechos de otras personas, como sucede en el caso de los presuntos deudores que, al no contar con garantía de audiencia (previa a la emisión de la providencia precautoria) pueden ver resarcida la molestia generada con la referida garantía que para tal efecto se otorgue. -

Sin embargo, no establecí que el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito deba aplicarse en lugar del artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio, tratándose de la garantía que exige último (sic) cuerpo normativo

para la eficacia de las providencias precautorias.

- - - Tocante a su alegación en el sentido de que en diversos órganos jurisdiccionales le han obsequiado las providencias que ha solicitado sin fijación de garantía debe desestimarse. - - -

En efecto, acorde con los artículos 17 y 16,

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN**

*fracción III, constitucionales, además de consagrar como atributos propios de la administración de justicia el de gratuidad y el de que las resoluciones de los tribunales se dicten de manera pronta, completa e imparcial, exige que las leyes federales y locales establezcan los medios necesarios para que en éstas se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, otorgando expresamente a los Estados la facultad y correlativa obligación, en el sentido de que las Constituciones y las leyes orgánicas locales deberán asegurar la independencia en el ejercicio de las funciones de los Magistrados y Jueces. - - - Debe precisarse que tanto la garantía de acceso jurisdiccional (artículo 17 constitucional) como la garantía de independencia de los Poderes Judiciales Locales (artículo 116, fracción III, constitucional), no sólo tienen la función de proteger a los funcionarios judiciales, sino ante todo de proteger a los justiciables. - - - En efecto, ante la prohibición de hacerse justicia por sí misma, es derecho de toda persona tener acceso a la justicia a través de tribunales independientes;*





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 242/2019

FORMA A-55

33

39

así la independencia de los Poderes Judiciales Locales, tiene como objeto salvaguardar el acceso a la justicia, ya que la sociedad debe contar con un grupo de Magistrados y Jueces que hagan efectiva cotidianamente la garantía de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. - -

- Esa autonomía implica que las decisiones de uno u otro órgano de impartición de justicia puedan pronunciarse en base (sic) a la ley respecto de un asunto, pueden o no coincidir pero no puede establecerse que el criterio de uno prevalezca respecto de otro de igual jerarquía, pues vulneraría esa autonomía de la que ambos gozan en el análisis de un asunto sometido a su potestad; caso diverso sería que en la misma hipótesis el juzgador del conocimiento aplique criterios diversos y más

aún cuando coincida alguna de las partes en uno u otro sumario, pues ello implicaría parcialidad y

vulneraría los derechos fundamentales de los justiciables. - - - En otra hipótesis, respecto del

tema propuesto, cabe destacar que podrían seguir un criterio en común si respecto de éste hubiere jurisprudencia, pues en ese caso, su observancia es obligatoria de conformidad con



PODER JUDICIAL DE LA  
FEDERACIÓN  
VAL COLEGIADO  
CIVIL DEL  
CIRCUITO  
DE MÉXICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*el numeral 217 de la Ley de Amparo. - - - Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis 2a. V/2003, de registro 184861, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 327, Tomo XVII-febrero de 2003, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis es: - - - 'JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL. La aplicación de la jurisprudencia por el órgano jurisdiccional puede hacerse de modos diferentes. Así, existen casos en los que al aplicarla el órgano hace suyas las razones contenidas en la tesis, como sucede cuando al examinar una de las cuestiones controvertidas se limita a transcribir el texto de la tesis sin necesidad de expresar otras consideraciones; o cuando estudia el problema debatido expresando razonamientos propios y los complementa o fortalece con la reproducción de alguna tesis de jurisprudencia relativa al tema. Sin embargo, esto no ocurre en el caso en que exista una jurisprudencia que establezca la inconstitucionalidad de la ley aplicada en el acto reclamado, pues en este supuesto el juzgador no hace un examen del tema debatido y resuelto por aquélla, sino que simplemente la aplica porque le resulta obligatoria, independientemente de que comparta sus razonamientos y sentido, es decir, en este caso el Juez o tribunal sólo ejercen su libertad de jurisdicción en la determinación relativa a si el caso concreto se ajusta o no a*



PODER JI  
FEDI  
DÉCIMO TRIBI  
EN MATE  
PRIMEI  
CIUDAD



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 242/2019

FORMAA-55

35

40

los supuestos que lleven a la aplicación de la jurisprudencia, mas no en el criterio que en ésta se adopta.' - - - Por ende, no hubo una incongruencia en la resolución reclamada ni omisión en la aplicación de los preceptos que invoca la quejosa y menos aún se desatendió el tópico relativo a la supletoriedad, pues quedó dilucidado en la presente, que no se encuentra en caso de excepción para que se le fije una garantía en las providencias precautorias que solicito. - - - Así las cosas, atento a lo expuesto en la presente, es evidente que el criterio que invoca la peticionaria bajo la voz: 'SUPLETORIEDAD DE LEYES REQUISITOS PARA QUE OPERE', no es aplicable, pues para que una tesis aislada o una jurisprudencia puedan servir como sustento a una consideración, es siempre y cuando resulte aplicable, evento que no acontece en el particular. - - - Sirve de sustento a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J.

32/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece:

'TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN. El artículo 221 de la Ley de Amparo establece que cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación, y de no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes. Así, cuando el quejoso transcribe en su demanda de amparo una tesis de jurisprudencia, implícitamente puede considerarse que pretende que el órgano jurisdiccional la aplique al caso concreto, por lo que éste debe verificar su existencia y determinar si es aplicable, supuesto en el cual, ha de resolver el asunto sometido a su jurisdicción conforme a ella, y si se trata de una tesis aislada o de algún precedente que no le resulte obligatorio, precisar si se acoge al criterio referido o externar las razones por las cuales se separa de él, independientemente de que el quejoso hubiere razonado su aplicabilidad al caso concreto; de modo que no puede declararse inoperante un concepto de violación ante la falta de justificación de los motivos por los cuales el quejoso considera que la tesis de jurisprudencia, aislada o precedente es aplicable.<sup>4</sup> - - - IX. DECISIÓN - - - En las narradas condiciones, dado que el acto reclamado no vulneró los derechos humanos referidos por la parte promovente, procede negar la protección constitucional.”



<sup>4</sup> Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 53, Abril de 2018, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 32/2018 (10a.). Página: 847. Registro: 2016525.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 242/2019

FORMA A-55

37

41

**CUARTO.** La parte recurrente formuló los agravios que consideró pertinentes, los que se tienen aquí por reproducidos para los efectos legales conducentes.

**QUINTO.** Son ineficaces los motivos de inconformidad de la recurrente.

De la lectura integral de su impugnación se advierte que pretende, esencialmente, se determine que está relevada de la exhibición de la garantía prevista en el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito que exige a las instituciones bancarias de la exhibición de depósitos o fianzas legales.

Lo anterior es ineficaz, porque como determinó el juez federal, este tribunal federal considera que en la especie resulta inaplicable lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito<sup>5</sup>.

En la sentencia recurrida se indicó que el otorgamiento de la garantía como requisito de eficacia de la medida precautoria -otorgada- no constituía un formalismo carente de razonabilidad ni excesivo, por el contrario,

constituía una condición que se justifica para reparar sin obstáculos la afectación que se produciría por la

<sup>5</sup> "Artículo 86. Mientras los integrantes del Sistema Bancario Mexicano, no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligados a constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos."

\* A  
indisponibilidad de los bienes del deudor, a quien ni siquiera se le concedía garantía de audiencia previa, para no frustrar la finalidad de la medida.

Se destacó que el artículo 1175 del Código de Comercio **no establecía salvedad alguna para la satisfacción de este requisito de eficacia**, por lo que exigía que todo el que solicitara la medida debía otorgar garantía (interpretación gramatical).

Que **aparentemente** existía una antinomia o incompatibilidad entre lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito y el 1175, fracción V, del Código de Comercio, sin embargo este aparente conflicto entre reglas debía resolverse conforme al principio de especialidad de la ley, porque los supuestos de procedencia y el procedimiento de las medidas de aseguramiento en materia mercantil se regulaban específicamente por la parte adjetiva del Código de Comercio y no por la Ley de Instituciones de Crédito, que tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito, así como el funcionamiento de las instituciones de crédito, de acuerdo con lo dispuesto por su artículo 1º.

Se señaló, además, que conforme a la interpretación funcional, el artículo 1175 del Código de Comercio resultaba congruente con la finalidad de reparar de manera íntegra y expedita los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al







deudor con el otorgamiento de la medida, al imponer que se otorgara una garantía real o personal que fuera desde luego **adicional** a los bienes del patrimonio con los que todo deudor responde a sus obligaciones, lo que permitía su fácil realización para compensar ese daño indebidamente ocasionado.

Esta determinación es correcta, porque este tribunal federal considera que en los casos en que resulte procedente decretar una providencia precautoria por actualizarse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 1168 del Código de Comercio<sup>6</sup>, la parte que la solicite debe cumplir, necesariamente, con el requisito de eficacia a que se refiere la fracción V del artículo 1175 del citado ordenamiento<sup>7</sup>, consistente en que garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea

<sup>6</sup> Artículo 1168. En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que son las siguientes: --- I. Radicación de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya promovido una demanda. Dicha medida únicamente tendrá los efectos previstos en el artículo 1173 de éste Código; --- II. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos: --- a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes; y --- b) Tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pide no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene. --- En los supuestos a que se refiere esta fracción, si los bienes consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes fungibles, se presumirá, para los efectos de este artículo, el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo. --- Tratándose de la retención de bienes cuya titularidad o propiedad sea susceptible de inscripción en algún registro público, el Juez ordenará que se haga la anotación sobre el mismo.

<sup>7</sup> Artículo 1175. El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos: --- (...) --- V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte. --- El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante.

absuelta su contraparte, aun cuando el promovente sea una institución bancaria.

Es así, porque de acuerdo con el Código de Comercio la eficacia de las providencias precautorias queda condicionada a que se cumpla este requisito indispensable, siendo este ordenamiento el que regula de manera específica los requisitos que habrá de cumplir la parte que solicite una medida precautoria, sin que prevea excepción alguna en este aspecto, específicamente por la calidad de la persona promovente.

Por tanto, al no estar prevista ninguna excepción en el propio ordenamiento que establece los supuestos de procedencia de las medidas cautelares y sus requisitos de eficacia, no es dable incorporarla, porque toda excepción debe estar prevista en el propio supuesto que excluye, no en uno diverso, pues considerarlo en sentido contrario, implicaría que por vía de "interpretación", se **ampliara un régimen privilegiado a casos concretos en los que el legislador no lo previó expresamente**. Es decir, se incurriría en una modificación de la norma creada, lo que inclusive implicaría una invasión competencial.

Cabe destacar que el alcance de este requisito de eficacia -fijación de garantía-, se trata de una medida de naturaleza **preventiva**, no de la obligación como tal, que





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 242/2019

FORMA A-55

41

43

finalmente podrá o no configurarse, por lo que el hecho de que en su oportunidad pueda cumplirse con la obligación de pago de daños y perjuicio ocasionados al presunto deudor, por la acreditada solvencia del solicitante, no tiene el alcance para sustituirla.

Esta medida preventiva tiene una razón válida consistente en responsabilizar al solicitante de la providencia cautelar en cuanto a su actuación sobre la base de que su otorgamiento deriva de un análisis preliminar de un aparente derecho y no de una cuestión de fondo ya dilucidada; así, básicamente, sirve de apoyo para que la medida no sea arbitraria.

Pero además, este órgano colegiado considera que resulta inaplicable el artículo 86 citado de acuerdo con el ámbito de regulación de la Ley de Instituciones de Crédito, que en su artículo 1º<sup>o</sup> establece que dicho ordenamiento tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito; la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito; las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar; su sano y equilibrado desarrollo; la protección de los intereses del público; y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano.

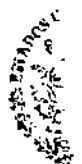
**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN**

<sup>8</sup>Artículo 1o. La presente Ley es de orden público y observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito, la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, su sano y equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano."

En tal contexto, al tener este ordenamiento una finalidad distinta de aquélla que originó el apartado adjetivo del Código de Comercio consistente en la regulación del acceso a la jurisdicción en asuntos de naturaleza mercantil, debe considerarse que no tiene el alcance para incidir en esta última, por tener un objeto diverso.

De lo anterior es dable concluir que el supuesto previsto en el artículo 86 citado resulta inaplicable, por lo que, contrariamente a lo manifestado por el quejoso, no existe una antinomia de normas, es decir, la regla establecida en este precepto no se contrapone con el artículo 1175 del Código de Comercio, sino que, en el caso, prevalece la norma especial que fija los términos de la regulación del caso concreto.

Incluso, el juez federal determinó que la regla contenida en este último precepto es acorde con lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, que faculta al legislador a establecer los plazos y términos en los que debe garantizarse el acceso a la justicia, en este caso, el derecho a la tutela cautelar, como vía imprescindible para que la tutela judicial efectiva no se frustre, por lo que contrariamente a lo manifestado por la quejosa, no puede considerarse que este requisito limita o restringe su acceso a la garantía cautelar, sino que cumple con una finalidad que no puede considerarse en su perjuicio si precisamente va encaminada a resguardar



PODER J:  
FEDI  
DÉCIMO TRIB.  
EN MATE.  
PRIMEI  
CIUDAD



la equidad entre las partes.

De igual modo, el juez federal señaló las razones por las cuales no favorecía al quejoso la interpretación pro persona pretendida, pues ese principio no podía servir de base para disminuir o poner en un plano inferior los derechos de otras personas, como sucedía en el caso de los presuntos deudores que al no contar con garantía de audiencia previa a la emisión de la providencia precautoria, podían ver resarcida la molestia generada con la referida garantía que para tal efecto se otorgara.

Esta determinación no la combate la quejosa porque sólo dice, básicamente, que debe aplicarse la norma más favorable en su beneficio, pero desconoce la integridad del sistema normativo que equilibra a las partes, siendo que el principio pro persona no puede implicar que con la interpretación más favorable hacia una parte, se desconozcan los derechos de otra.

No pasa inadvertido que la promovente refiere en esencia que, en su caso, procede la aplicación analógica del artículo 864 invocado. Sin embargo, no puede considerarse que ambos preceptos prevean un supuesto análogo y por tanto, que se imponga resolver en el mismo sentido.

Es así porque el precepto citado en primer término refiere, en lo que interesa, que las instituciones bancarias



PODER JUDICIAL DE LA  
FEDERACIÓN  
CIRCUITO  
DE MÉXICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

están eximidas de exhibir depósitos y fianzas legales y el artículo 1175 del Código de Comercio refiere cuándo y cómo procede la retención de bienes.

En su caso, lo que realmente pretende la quejosa es una interpretación sistemática -cuestión supletoria- para que una excepción prevista en la Ley General de Instituciones de Crédito se incluya en un supuesto establecido en un artículo del Código de Comercio, pero con ello desconoce que las excepciones a las reglas generales deben estar previstas en el mismo ordenamiento, como ya se indicó.

Finalmente, no pasa inadvertido que la recurrente refiere que el juzgador (sic) se apoya en dos criterios de rubro: **"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO DEBEN CONSTITUIR GARANTÍA PARA OBTENERLA"** y **"SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO. NO ESTÁN EXENTAS DE PRESENTAR EN LA DILIGENCIA DE REMATE EL BILLETE DE DEPÓSITO POR EL IMPORTE DEL DIEZ POR CIENTO DE SU PUJA."**; sin embargo, de la lectura integral de la sentencia impugnada se advierte que éstos criterios no fueron invocados en la sentencia.

En tal contexto, si lo que pretende la quejosa es la inaplicación de dichos criterios jurisprudenciales -que según fueron aplicables por analogía- es que parte de una premisa





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 242/2019

FORMA A-55

45

45

incorrecta porque estos no fueron tomados en cuenta al momento de resolver la sentencia que se analiza, por lo que su impugnación en este aspecto debe desestimarse.

En relación con la manifestación de la promovente en el sentido de que resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia de rubro: **"SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO. EN SU CARÁCTER DE PERSONAS MORALES OFICIALES ESTÁN EXENTAS DE PRESTAR LAS GARANTÍAS QUE LA LEY DE AMPARO EXIGE A LAS ((PARTES"**, esto es infundado, porque el criterio citado se refiere a personas morales oficiales del Estado, que no gozan de la misma naturaleza que es precisamente lo que hace que aquellas estén exentas de la exhibición de la garantía (forman parte de la Administración Pública Federal), por lo que no es dable concluir que se esté en un supuesto análogo, que permitiera la misma solución.

Por las razones expuestas, considerando que en la especie, este órgano colegiado considera que resulta inaplicable el supuesto previsto en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito porque no está establecido en la norma que regula el procedimiento relativo sino en un ordenamiento diverso que, además, tiene un origen y finalidad distinto, es que son ineficaces los motivos de inconformidad examinados.

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN**

Ante la ineficacia de los agravios de la quejosa es procedente confirmar la sentencia recurrida y negar la protección constitucional solicitada.

Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 93 de la Ley de Amparo; se:

## RESUELVE

**PRIMERO.** Se confirma la sentencia impugnada, dictada por el **Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México**, en el juicio de amparo 572/2019.

**SEGUNDO.** La Justicia de la Unión no ampara ni protege a [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], en contra del acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los Magistrados que integran el Décimo Tribunal Colegiado







PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 242/2019

FORMA-A-55

47

48

en Materia Civil del Primer Circuito, J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI, VÍCTOR HUGO DÍAZ ARELLANO, y MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO, siendo Presidente y Ponente el primero de los nombrados ante el Secretario de Acuerdos, licenciado Hilario Salazar Zavaleta, que autoriza y da fe. Doy fe.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MAGISTRADO PRESIDENTE  
J. JESUS PÉREZ GRIMALDI.

MAGISTRADO  
VÍCTOR HUGO DÍAZ ARELLANO.

MAGISTRADA  
MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS  
LIC. HILARIO SALAZAR ZAVALA.



DEL  
ON  
COLEGIADO  
VIL DEL  
CITO  
ÉXICO

Esta hoja pertenece a la parte final de la resolución

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN**

dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del  
Primer Circuito, en el recurso de revisión civil R.C. 242/2019,

interpuesto por el quejoso [REDACTED] en [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED]

[REDACTED] p [REDACTED] [REDACTED]. En el fallo se resolvió:

**PRIMERO.** Confirmar la sentencia impugnada. **SEGUNDO.**  
Negar el amparo.

**EL SECRETARIO DE ACUERDOS**

**LIC. HILARIO SALAZAR ZAVALETA.**

El suscrito Secretario de Acuerdos del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, **HACE CONSTAR** que con fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, y dentro del término que señala el artículo 184, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se firmó el engrose de la sentencia dictada en el recurso de revisión civil **R.C. 242/2019**. Doy fe.

PODER  
FE  
DÉCIMO TF  
EN MA  
PRIM  
CIUD

**EL SECRETARIO DE ACUERDOS**

**LIC. HILARIO SALAZAR ZAVALETA.**

PAJ/nggs\*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

47

En 24 OCT 2019, se notificó por lista la resolución anterior a las partes, en términos del artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo. Doy Fe.

El C. Actuario  
Lic. Rigoberto Enrique García Muñoz

En 25 OCT 2019 surtió sus efectos legales la notificación a que se refiere la razón que antecede, conforme a la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo. Doy fe.

El C. Actuario  
Lic. Rigoberto Enrique García Muñoz

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
CIRCUITO  
MEXICO

Esta hoja corresponde a las razones de notificación de la resolución de 24 OCT 2019 dictada dentro del expediente R.C. 242/2019 interpuesto por [REDACTED]

El C. Actuario  
Lic. Rigoberto Enrique García Muñoz

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



INTEXT

PODER. FE:  
DÉCIMO-TR.  
EN MAY  
PRIL  
CIUD

**Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada**  
**Nombre del documento firmado: RespuestaAcuerdo.pdf**  
**Secuencia: 3144120**

**Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.**

**Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal**

[illegible]